

	Proceso de Gestión Jurídica	Código: FT-GJ-002
		Versión: 2
	Formato de Notificación por Aviso	Vigencia desde: 02/04/2020

Bogotá D.C.,

Señor:

TONY ALBERTO STELLER FALLAS

CE 602830623 de costa rica

Esmeralda Ecuador

LA DIRECCION TECNICA DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA AUNAP NOTIFICA POR AVISO A:

TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica, de la resolución número 0132 del 31 de enero del 2023 *“Por medio del cual se resuelve una investigación administrativa contra TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica por la transgresión al estatuto general de pesca, dentro de la investigación administrativa NUR: 053-2019”* expedido dentro de la Investigación Administrativa NUR 053-2019, por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP.

De conformidad con el inciso 2º del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se remite copia íntegra del acto administrativo en mención en 04 (cuatro) folio, precisando que el mismo quedará debidamente notificado al finalizar al día siguiente a la fecha de entrega del presente aviso en el lugar de destino.

Se le hace saber que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

Se le hace saber que, contra el presente acto administrativo, proceden los recursos de reposición y de apelación dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación en los términos y para los efectos descritos en el artículo 74 s.s. de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con lo establecido en la resolución 1622 del 2022.


Si el acto administrativo corresponde al inicio de una investigación y/o formulación de pliego de cargos, procede los respectivos descargos, cuya presentación por escrito deberá hacerse ante al Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP y cuenta con el plazo indicado en la parte resolutive del acto administrativo que se anexa con el presente aviso.

Cordialmente,



JENNY RYVERA CAMELO
Directora Técnica de Inspección y Vigilancia.

Proyectó: Henry Gómez Pacheco / Abogado DTIV.

 AUNAP <small>AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA</small>	Proceso de Gestión Jurídica	Código: FT-GJ-002
		Versión: 2
	Formato de Notificación por Aviso	Vigencia desde: 02/04/2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 0132 DE 31 DE ENERO DE 2023

“Por medio del cual se resuelve una investigación administrativa contra TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica por la transgresión al estatuto general de pesca, dentro de la investigación administrativa NUR: 053-2019”

LA DIRECTORA TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA

En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, conferidas en la Ley 13 de 1990, el Decreto Reglamentario 2256 del 91, Decreto 1071 de 2015, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 4181 del 2011, resolución 1622 del 2022 y,

CONSIDERANDO:

Que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, es competente para adelantar la presente investigación administrativa en virtud de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 5° del Decreto 4181 de 2011, el cual señala que es función de la AUNAP: **“Adelantar las investigaciones administrativas sobre las conductas violatorias de las disposiciones establecidas en el Estatuto General de Pesca o normas que lo sustituyen o adicionen, e imponer las sanciones a que hubiere lugar, conforme con la normativa vigente.”** (Negrilla y Subrayado fuera de Texto).

Que igualmente el numeral 12 del citado artículo 5° del Decreto 4181 de 2011 señala que es función de la AUNAP: **“Realizar las actuaciones administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, en desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera y de la acuicultura.”** (Negrilla y Subrayado fuera de Texto).

Que en concordancia con lo anterior el numeral 6 del artículo 16° del mencionado Decreto 4181 de 2011, señala que es función de la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia de la AUNAP: **“Adelantar los procesos de investigación administrativa por infracción al estatuto general de pesca o régimen jurídico aplicable”.** (Negrilla y Subrayado fuera de Texto).

Que la Resolución número 1622 de 22 de julio de 2022 “Por la cual se establecen los procedimientos sancionatorios por infracción al Estatuto de Pesca en Pesca Marina y Pesca Continental y se establecen otras disposiciones” establece: **ARTÍCULO PRIMERO:** La Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, conforme a lo expuesto en los numerales cuarto (4) y sexto (6) del artículo 16 del Decreto 4181 de 2011, en cabeza del Director de esta área, será la encargada de realizar la investigación e imponer las respectivas sanciones a que haya lugar en primera instancia y resolver el recurso de reposición contra las mismas, para todos los procesos administrativos de carácter sancionatorios por infracción a la Ley 13 de 1990 (Estatuto General de Pesca), o norma que la modifique o sustituya, en tratándose de pesca marina para lo cual se seguirá el procedimiento consagrado en la Ley 1851 de 2017.

Y de conformidad con los siguientes;

1. HECHOS

“Por medio del cual se resuelve una investigación administrativa contra LILER TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica por la transgresión al estatuto general de pesca, dentro de la investigación administrativa NUR: 053-2019”

La Armada Nacional, le pone en conocimiento a la AUNAP regional Cali hechos acaecidos durante el desarrollo de una operación marítima en el que efectuaron la incautación de un material producto de la ilícita actividad pesquera¹; a la embarcación de bandera de Costa Rica de nombre KEMBLI I con número de matrícula PG-9642.

Se indica, que el día jueves 23 de mayo de 2019, siendo las 9:15 am, en el muelle Semar en Buenaventura, se hizo presencia por parte de la AUNAP, a la diligencia de decomiso preventivo del producto capturado el 20 de mayo de 2019, a las 23:00 horas aproximadamente cuando miembros de la Armada interceptaron a la embarcación de nombre KEMBLI I de matrícula PG 9642, bandera de Costa Rica con cuatro tripulantes señores: TONY ALBERTO STELLER FALLAS con identificación No. 602830623 de Costa Rica, JOSE GABRIEL VAQUERO CHACON con identificación No. 604480492 de Costa Rica, RODRIGO GRIMA OBANDO con identificación No. 601220138, JOSE ANDRES UMAÑA ALVAREZ con identificación No. 67310444 de Costa Rica; quienes no reportan dirección de ubicación; la cual se encontraba realizando faena de pesca en área general Isla Malpelo encontrándose en aguas Colombianas sin autorización; el producto decomisado fue de 326 kilos de Toyo Aletinegro Y 42 kilos de Atún Albacora.

Como presunto infractor se identifica al señor **TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica**

Que mediante auto número 124 del 02 de agosto del 2022, en consonancia con el artículo 8 de la ley 1851 del 2017, se fijó fecha y hora para celebración de audiencia a la cual la parte investigada no acudió, dándose como concluida esta etapa y procediéndose de esta manera a resolver la investigación.

2. FUNDAMENTO NORMATIVO.

De acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, se puede colegir la ocurrencia de una infracción a lo consagrado en el 54 numeral 1 de la ley 13 de 1990, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 1851 del 2017, Decreto 2256 de 1991, Decreto 1071 del 2015

LEY 13 DE 1990: ARTÍCULO 53. Se tipifica como infracción toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en la presente Ley y en todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

ARTICULO 54. Está prohibido:

1. *Realizar actividades pesqueras sin permiso, patente, autorización ni concesión o contraviniendo las disposiciones que las regulan...*

ARTÍCULO 55: Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente Ley y demás normas legales y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción a una o más de las siguientes sanciones que aplicará el INPA sin perjuicio de las sanciones penales y demás a que hubiere lugar:

1. *Conminación por escrito.*
2. *Multa.*
3. *Suspensión temporal del permiso, autorización, concesión o patente según sea el caso*
4. *Revocatoria del permiso, autorización, concesión o patente.*

“Por medio del cual se resuelve una investigación administrativa contra LILER TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica por la transgresión al estatuto general de pesca, dentro de la investigación administrativa NUR: 053-2019”

5. Decomiso de embarcaciones, equipos o productos.

6. Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento. (...)”

3. PRUEBAS

Las pruebas allegadas al proceso fueron analizadas en detalle y apreciadas en conjunto y de manera integral conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con los principios de *conducencia*, *pertinencia*, *racionalidad* y *utilidad* que rigen este tipo de actuaciones:

Documentales:

- Informe de diligencia de decomiso preventivo.
- Informe de la armada nacional.
- Solicitud de donación.
- Formato Acta de decomiso preventivo 0003 del 23 de mayo del 2019.
- Acta de secuestre depositario.

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO CONCRETO

Antes de efectuar el análisis puntual del caso bajo estudio, debemos precisar acerca de uno de los principio fundantes del debido proceso, como lo es la pertinencia fáctica y jurídica de las actuaciones administrativas, lo cual sin hacer mucha disertación tiene arraigo en la Constitución Política de Colombia en el artículo 29 en concordancia a los preceptos establecidos en el que el artículo 209, señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, los cuales fijan los lineamientos que debe adoptar la administración en su actuar preponderando por los intereses generales conforme a los fines del Estado, señalando para tal efecto:

*“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, **eficacia**, **economía**, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. (Negrilla y Subrayado fuera de Texto)*

En virtud a esta norma superior, se puede inferir que las entidades del Estado deberán trazar su desempeño administrativo en el marco de la actuación que más avenga con la materialización de dichos principios y que permita el pleno goce de los derechos de los ciudadanos.

De conformidad con el propósito de las actuaciones administrativas sancionatorias, definido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, este tipo de procedimientos se deben adelantar de oficio o a solicitud de parte cuando se cumplan los preceptos que permitan establecer que existe mérito para adelantar la investigación administrativa.

Es procedente el decomiso administrativo definitivo, conforme lo expuesto en la Sentencia C-459 del 2011, la cual concibe el decomiso administrativo como:

“Por medio del cual se resuelve una investigación administrativa contra LILER TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica por la transgresión al estatuto general de pesca, dentro de la investigación administrativa NUR: 053-2019”

“una sanción establecida por el legislador y que priva de la propiedad del bien a su titular sin indemnización alguna, por estar vinculado con la infracción objeto de sanción o ser el resultado de su comisión. En ese sentido, el decomiso puede ser penal o administrativo. Igualmente, se ha admitido el llamado decomiso administrativo, cuyo origen, a diferencia del penal, no está en la infracción del estatuto penal sino en la comisión de una contravención de tipo administrativo, tal como sucede en el derecho aduanero o el derecho policivo. En ese orden, su regulación no está contenida en un solo régimen sino en varios, dependiendo de su finalidad.”

De conformidad con los hechos narrados anteriormente, se puede concluir el incumplimiento a la normatividad pesquera, por parte del señor **TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica**, por haber contravenido lo dispuesto en el artículo 54 numeral 1 de la ley 13 de 1990, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 1851 del 2017, Decreto 2256 de 1991, Decreto 1071 del 2015.

Con fundamento en lo anterior, considera este Despacho que existe merito suficiente para resolver la investigación administrativa, con fundamento en la ley 13 del 1990, el decreto reglamentario 2256 de 1991 compilado por el decreto 1071 del 2015, ley 1851 del 2017, en concordancia con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) Ley 1437 del 2011, teniendo en cuenta que el resultado de las pruebas obrantes en el expediente corroboran la existencia de méritos suficientes para declarar infractor y proceder a la imposición de la sanción contenida en el artículo 55 numeral 5 de la ley 13 de 1990 modificado por el artículo 7 de la ley 1851 del 2017.

En relación con lo anteriormente expuestos y en ejercicio de los principios de eficacia, economía y celeridad, previstos en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), aplicables a todas las autoridades al momento de interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos.

*“**principio de eficacia:** las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Código las Irregularidades, procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”.*

***Principio de economía:** las autoridades deberán proceder con **austeridad** y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.*

***Austeridad:** capacidad de administrar los bienes materiales y riquezas de una manera justa y sencilla sin excesos o extras, aminorando los gastos en lo esencial.*

5. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN.

Probado el incumplimiento de la normativa pesquera por parte del señor **TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica**, al contravenir lo

“Por medio del cual se resuelve una investigación administrativa contra LILER TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica por la transgresión al estatuto general de pesca, dentro de la investigación administrativa NUR: 053-2019”

dispuesto en la Ley 13 de 1990 en su Artículo 53, 54 numeral 1, y en especial el artículo 3 de la ley 1851 del 2017, razón por la cual podemos concluir que es procedente imponer como sanción con fundamento en los artículos 55 numeral 5 de la ley 13 de 1990, modificado por el artículo 7 de la ley 1851 del 2017 consistente en el decomiso definitivo de los elementos relacionados en el acta de decomiso preventivo, lo anterior en armonía con lo consagrado en el artículo 50 de la ley 1437 de 2011.

Fundamentos constitucionales de la sanción a imponer:

En sentencia C-595 de 27 de julio de 2010, Magistrado Ponente Dr., Jorge Iván Palacio Palacio, la H. Corte Constitucional manifestó:

5.3. Potestad punitiva penal y administrativa sancionadora. Modalidades de sanciones administrativas. La potestad sancionatoria administrativa es una clara manifestación del ius puniendi del Estado. Este comprende diversas disciplinas o especies como el derecho penal, el derecho contravencional, el derecho correccional, el derecho de juzgamiento político-impeachment-y el derecho disciplinario o correctivo de la función pública.

El ejercicio del poder punitivo del Estado se manifiesta generalmente por la vía administrativa y la vía judicial penal. Las distinciones entre una y otra radican en los objetivos, particularmente en los bienes jurídicos materia de protección.

La potestad sancionatoria penal propende por la garantía del orden social en abstracto-bienes sociales más amplios la consecución de fines retributivos, preventivos y resocializadores; y (sic) presente un mayor grado de afectación de los intereses Jurídicamente protegidos que daría lugar a la privación de la libertad. No ocurre lo mismo con la potestad sancionatoria administrativa al buscar primordialmente garantizar la organización y el funcionamiento de la Administración, y cumplir los cometidos estatales; cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos consignados; que descartan la imposición de sanciones privativas de la libertad.

En la Sentencia C-616 de 2002, se sostuvo:

"La potestad sancionadora administrativa se diferencia cualitativamente de la potestad punitiva penal. Con la potestad punitiva penal, además de cumplirse una función preventiva, se protege "el orden social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, correctivo o resocializador, en la persona del delincuente", mientras que con la potestad administrativa sancionatoria se busca garantizar la organización y el funcionamiento de las diferentes actividades sociales. La Corte ha resaltado que la potestad sancionadora de la administración es un medio necesario para alcanzar los objetivos que ella se ha trazado en el ejercicio de sus funciones. En efecto, "la fracción de poder estatal radicada en cabeza de la administración, se manifiesta a través de una gama de competencias o potestades específicas (de mando, ejecutiva o de gestión, reglamentaria, jurisdiccional y sancionadora), que le permiten a aquella cumplir con las finalidades que le son propias)".

“Por medio del cual se resuelve una investigación administrativa contra LILER TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica por la transgresión al estatuto general de pesca, dentro de la investigación administrativa NUR: 053-2019”

Bajo esta perspectiva, la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración pública se distingue de las demás especies del derecho sancionador, especialmente por los siguientes factores:

"(i) La actividad sancionatoria de la Administración persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo 209 de la Carta".

(ii) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la Administración".

(iii) Dicha potestad se ejerce "a partir de la vulneración o perturbación de reglas preestablecidas, pero que, no obstante, ese contenido represivo presenta una cierta finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancionador, junto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza latente para quien sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de tales prescripciones las infringe deliberadamente".

(iv) en relación con la sanción aplicable “dentro del ámbito sancionador administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido”.

(V) Y finalmente la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo", "

También, ha indicado esta corporación que "i) la potestad sancionadora propia de la administración es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines(97), pues ii) permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento (...) de una disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización de sus cometidos (98) y iii) constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas".

Derecho administrativo sancionador que constituye una expresión de poder jurídico indispensable para la regulación de la vida en sociedad y así pueda la Administración cometer apropiadamente sus funciones y realizar sus fines. Si bien se activa a partir del desconocimiento de reglas preestablecidas, tiene una cierta finalidad preventiva al proponer un cuadro sancionador como consecuencia del incumplimiento de las prescripciones normativas.

Por sanción ha de entenderse "un mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación de pago de una multa (...)".

Potestad de la administración que se traduce normalmente en la facultad de imponer i) sanciones disciplinarias para reprimir las acciones, u omisiones antijurídicas en las que incurrir los servidores públicos o aquellas personas que

“Por medio del cual se resuelve una investigación administrativa contra LILER TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica por la transgresión al estatuto general de pesca, dentro de la investigación administrativa NUR: 053-2019”

sin tener dicha calidad están habilitadas para ejercer transitoriamente funciones públicas y li) sanciones correctivas que se aplican a los particulares que infringen las obligaciones y restricciones que se les han impuesto.

Dicha potestad igualmente ha sido relacionada con la función de policía "que supone el ejercicio de facultades asignadas al ejecutivo por el legislador, con miras a garantizar el orden público en sus diversas facetas Así las facultades administrativas relativas, por ejemplo, a la organización del transporte público, la comercialización de alimentos, a la preservación del medio ambiente, al régimen de cambios internacionales, etc., tienen su justificación en la necesidad de mantener las condiciones de salubridad, tranquilidad y seguridad implicadas en la noción de orden público".

Igualmente ha sido vinculada por un sector de la doctrina administrativa tradicional como una expresión del poder de policía "en cuya virtud el Estado tiene la atribución de regular el ejercicio de las libertades individuales con el fin de garantizar el orden público. La sanción viene a ser el instrumento coactivo para hacer cumplir la medida de policía".

En el presente caso para determinar la clase de sanción a imponer, de conformidad con el artículo 55 de la ley 13 de 1990 nos remitiremos a los parámetros consagrados en el artículo 50 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo así:

El artículo 50 de la ley 1437 de 2011 reza:

ARTICULO 50. GRADUACION DE LAS SANCIONES. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.

Ley 1851 del 2017 Artículo 7. Modifíquese el artículo 55 de la Ley 13 de 1990 "Estatuto General de Pesca" el cual quedará así:

Artículo 55. Sanciones administrativas. Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente Ley y demás normas legales sobre la materia expedidas por las autoridades colombianas competentes, se harán acreedoras según la gravedad de la infracción a una o más de las siguientes sanciones, que aplicará la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -

“Por medio del cual se resuelve una investigación administrativa contra LILER TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica por la transgresión al estatuto general de pesca, dentro de la investigación administrativa NUR: 053-2019”

AUNAP o quien haga sus veces, sin perjuicio de las sanciones penales y demás a que hubiere lugar:

1. Conminación por escrito.
2. Multa.
3. Suspensión temporal del permiso, autorización, concesión o patente según sea el caso.
4. Revocatoria del permiso, autorización, concesión o patente.
5. Decomiso de embarcaciones, equipos o productos.
6. Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento.

En consecuencia y en ejercicio de la facultad sancionadora que tiene la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, en del incumplimiento del estatuto general de pesca y demás normas vigentes y aplicables, este despacho atendiendo a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, considera que, en atención a los criterios citados para la imposición de la sanción, esta no será otra que las correspondientes al decomiso del producto pesquero.

En virtud de lo anteriormente considerado, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infractor a **TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica**, por haber transgredido el artículo 54 numeral 1 de la ley 13 de 1990, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 1851 del 2017, Decreto 2256 de 1991, Decreto 1071 del 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el decomiso preventivo y ordenar el decomiso administrativo de los elementos relacionados en Acta de decomiso preventivo 0003 del 23 de mayo del 2019, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a **TONY ALBERTO STELLER FALLAS, CE 602830623 de costa rica**, de conformidad con lo consagrado en el artículo 66 y subsiguientes de la ley 1437 de 2011 código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y la ley 2213 del 2022, procediendo a la entrega gratuita, autentica e integra de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición y de apelación dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación en los términos y para los efectos descritos en el artículo 74 s.s. de la Ley 1437 de 2011, los cuales podrán ser interpuesto, de conformidad con lo establecido en la resolución 1622 del 2022.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los treinta y un (31) día del mes de enero de 2023


JENNY RIVERA CAMELO

Directora Técnica de Inspección y Vigilancia